

OCUPANTES Y PROPIETARIOS DURANTE LA EXPANSIÓN DE LA FRONTERA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA, 1780-1860¹

Guillermo Banzato y Marta Valencia²

Universidad Nacional de La Plata

El proceso de ocupación del espacio pampeano, iniciado a partir de mediados del siglo XVI, cuando los habitantes hispano-criollos comenzaron a repartirse las tierras de los alrededores de la recién fundada Buenos Aires, y realizado a expensas de las tribus autóctonas, implicó que la seguridad de la frontera interior fuera un problema permanente hasta la definitiva derrota militar de estos grupos en 1879.³ Luego de infructuosos intentos por establecer fuertes permanentes entre 1740 y 1770, durante el gobierno del virrey Vértiz se proyectó y llevó a cabo una estrategia consistente en el establecimiento de poblaciones de campaña que ocuparan las tierras y, al mismo tiempo, se articularan estableciendo una valla a la vez defensiva y productiva. Así, desde 1779 en adelante, el fuerte de Chascomús, junto a los de Ranchos, Monte, Luján, Salto, Rojas, y los fortines de Lobos, Mercedes (hoy Colón), Navarro, Areco y Melincué, conformaron la nueva línea de fronteras en un radio de 140 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.⁴ De esta manera se abrió una nueva región a la colonización rural que acercó la frontera al río Salado, avanzando sobre el territorio en el que se asentaban las comunidades aborígenes. Desde la fundación de las guardias de frontera hasta el año 1822 en que se prohibió la enajenación de tierra pública, se cumplió una etapa caracterizada por la continuidad del orden jurídico derivado de la colonia y por un proceso de rápido asentamiento poblacional e inmediata puesta en producción de la tierra.⁵

¹Una primera versión se presentó a las *Primeras Jornadas Interdisciplinarias de estudios agrarios y agroindustriales*, Buenos Aires, 1999. Agradecemos los comentarios de Jorge Gelman en esa oportunidad

²Guillermo Banzato es Profesor Adjunto de Historia Económica Argentina en la Facultad de Ciencias Económicas e investigador del Centro de Estudios Histórico-Rurales de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata. E-mail: gbanzato@yahoo.com.ar
Marta Valencia es Profesora Titular de Historia Económica Argentina en la Facultad de Ciencias Económicas e investigadora Independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y miembro del Comité Científico del Centro de Estudios Histórico-Rurales de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata. E-mail: valencia@isis.unlp.edu.ar

³DUART, Diana. "Cien años de vaivenes. La frontera bonaerense (1776-1870)", en MAYO, Carlos (editor). *Vivir en la frontera. La casa, la dieta, la pulpería, la escuela. (1770-1870)*, Buenos Aires, Biblos., pp. 15-40.

⁴BARBA, Fernando. *Frontera ganadera y guerra con el indio*, La Plata, UNLP, 1995.

⁵BANZATO, Guillermo y QUINTEROS, Guillermo. "La ocupación de la tierra en la frontera bonaerense. El caso de Chascomús, 1779-1821", en *Estudios/Investigaciones. Estudios de Historia Rural II*, La Plata, UNLP, 1992; MAYO, Carlos y LATRUBESSE, Amalia. *Terratenientes, soldados y cautivos*, Buenos Aires, Biblos, 1998.

Las mercedes reales y la moderada composición fueron los sistemas que la legislación colonial preveía para entregar los terrenos realengos a manos privadas, aunque se extendieron hasta el siglo XIX. El primero por la perduración de los títulos y porque, en su esencia, se reprodujo con las donaciones del Directorio luego de 1818; el segundo porque los gobiernos posrevolucionarios lo siguieron utilizando en el primer ordenamiento legal de la campaña hasta 1822.⁶

En la etapa comprendida entre 1820 y 1850 la frontera de Vértiz pudo considerarse como una zona más segura, ya que las expediciones llevadas a cabo durante la década de 1820 hasta la de Rosas en 1833, consolidaron los asentamientos que ya se habían establecido al sur del río Salado, y ampliaron considerablemente el área de tierras productivas que llegaba ahora a los 200 kilómetros al oeste y 350 al sur de la ciudad de Buenos Aires.⁷ Cabe destacar que toda esta expansión coincidió con el decaimiento de la Banda Oriental y el litoral argentino como fuertes regiones ganaderas debido a las guerras civiles y con el Imperio del Brasil. Paralelamente, la coyuntura internacional permitió un aumento en las exportaciones de cueros que sumado al bajo costo de instalación de las estancias reportaba importantes dividendos.⁸ En este período se llevó a cabo el traspaso en usufructo de tierras estatales a manos privadas mediante el sistema de enfiteusis (1822-1840), y luego la transferencia en propiedad plena a partir de las ventas entre 1836 y 1840, en que se suspendieron las transacciones con tierras públicas.⁹ La defensa y permanente intento de ampliación de la frontera motivó frecuentes exploraciones en el desierto, y particularmente en los parajes inmediatos a la margen derecha del río Salado. Así, desde fines del siglo XVIII se conocía la laguna de Bragado o Bragado Grande, aunque esta zona se fue poblando recién a partir de 1830 con la oferta de tierras en enfiteusis, en 1846 se estableció un puesto militar y surgió el pueblo de Santa Rosa de Bragado.¹⁰

Luego de la caída de Rosas, en la etapa de organización nacional, se crearon nuevas condiciones para la articulación de los intereses de los sectores dominantes del interior al

⁶ Las mercedes reales y las donaciones otorgaban gratuitamente la tierra, la moderada composición exigía el pago de la tierra previa tasación. Ver BANZATO, Guillermo. "Ocupación y acceso a la propiedad legal de la tierra en la región nordeste del río Salado. Chascomús, Ranchos y Monte, 1780-1880." Tesis doctoral, UNLP, 2002, inédita.

⁷ BARBA, Fernando. *Frontera ganadera y guerra con el indio*, La Plata, EUNLP, 1997, pp. 78-85.

⁸ HALPERIN DONGHI, Tulio. "La expansión ganadera de la campaña de Buenos Aires (1810-1852)", en DI TELLA, Torcuato y HALPERIN DONGHI, Tulio. *Los fragmentos del poder*, Buenos Aires, Jorge Álvarez, 1969, pp. 21-73.

⁹ Con la enfiteusis los particulares tenían sólo el usufructo de las parcelas que ocupaban y debían pagar un canon. Este sistema reemplazó a las donaciones y la moderada composición, ya que no se podía enajenar la tierra pública porque había quedado como garantía del empréstito Baring. INFESTA, María Elena. "Usufructo y apropiación de tierras públicas. Buenos Aires, 1820-1850". Tesis doctoral, UNLP, 1991, inédita; "Usufructo de las tierras públicas en Buenos Aires: la enfiteusis, 1821-1840", en BONAUDO, Marta y PUCCIARELLI, Alfredo (comp) *La problemática agraria. Nuevas aproximaciones*, Buenos Aires, CEAL, 1993.

¹⁰ LEVENE, Ricardo (dir.) *Historia de la provincia de Buenos Aires y formación de sus pueblos*, La Plata, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, 1941, v. 2, p. 104.

circuito económico que mantenía como eje el puerto de Buenos Aires, aunque este proceso no estuvo exento de dificultades ya que la provincia, resguardando para sí las rentas de la aduana, se había autoexcluido del proceso de integración que nucleó a las del Interior y el Litoral en la Confederación Argentina. Con Rosas, cayó el delicado sistema que entre negociaciones y fuerza militar contenía a las tribus aborígenes. En 1852, la inseguridad se adueñó nuevamente de la frontera y volvieron a invadir las estancias alcanzando el norte de la provincia.¹¹ Durante estos años, los nuevos gobiernos revisaron la política de tierras rosista,¹² optando en una primera etapa por arrendar los terrenos en manos del Estado, con el fin de ordenar la situación legal de muchos particulares con derechos adquiridos en los períodos anteriores. A partir de 1858 se estableció una línea que delimitaba el territorio controlado por el gobierno, renovándose en los círculos políticos la inquietud por encontrar una solución definitiva al problema de la frontera interior. La economía de Buenos Aires continuó la exportación de cueros, carne salada y sebo, y al mismo tiempo entró en lo que se ha denominado la “fiebre del lanar”.¹³ Para entonces la extensión de la frontera interior cobró nuevo impulso, alcanzando ahora una distancia de 250 kilómetros al oeste y casi 600 hacia el sur de Buenos Aires.

A partir de década de 1860 se operaron simultáneamente varias transformaciones en la estructura política, económica y social del país al calor de las nuevas oportunidades generadas por la revolución tecnológica europea y su constante aumento en la demanda de materias primas. La producción de lana alcanzó sus cifras más altas, se tendieron las primeras líneas férreas, aumentaron notablemente las inversiones británicas, todo ello en el marco de la reciente unidad política con la incorporación de Buenos Aires mediante la aceptación de la constitución de 1853 reformada y la consecuente nacionalización de las rentas aduaneras. En esta época los terrenos arrendados fueron transferidos definitivamente a manos privadas mediante sucesivas ventas.¹⁴ A fines de la década de 1870, la última etapa de la incorporación de tierras se realizó primero en base a una estrategia defensiva, pero ante sus escasos resultados se avanzó militarmente sobre los dominios de los aborígenes, alcanzando hasta el río Negro en 1879.¹⁵ Como lo afirmaron varios historiadores, el siglo XIX fue el siglo de la ocupación del territorio de la provincia de Buenos Aires, fue acompañado por las transformaciones de la ganadería, con una inserción

¹¹ WALTHER, Juan Carlos. *La conquista del desierto*, Buenos Aires, Eudeba, 1970.

¹² INFESTA, María Elena y VALENCIA, Marta. “Tierras, premios y donaciones, Buenos Aires, 1830-1860”, en *Anuario IEHS*, nº2, 1987, pp. 177-213.

¹³ SABATO, Hilda. *Capitalismo y ganadería en Buenos Aires: la fiebre del lanar. 1850-1890*, Sudamericana, Buenos Aires, 1989.

¹⁴ VALENCIA, Marta E. “La política de tierras públicas después de Caseros”, Tesis doctoral, UNLP, 1983, inédita.

¹⁵ BARBA, Enrique, et. al. “La Campaña del Desierto y el problema de la tierra: la ley de 1878 y su aplicación en la provincia de Buenos Aires”, en: *Segundo Congreso de Historia de los Pueblos de la provincia de Buenos Aires*, La Plata, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, 1974, pp.

más fuerte de sus productos en el mercado internacional a raíz del menor coste de los fletes interoceánicos y la necesidad de materias primas de los países centrales. En suma, se asistió a la maduración del proceso que se había iniciado varias décadas atrás: la organización nacional con Buenos Aires unida al resto del territorio, con un claro liderazgo a lo largo de esta etapa por haber vencido en todos los frentes, y porque sobre la base de las instituciones bonaerenses se irá organizando el nuevo aparato estatal.

La ocupación y acceso a la propiedad legal de la tierra en la provincia de Buenos Aires durante el siglo XIX no estuvo exenta de conflictos, ya sea que los pobladores defendieran sus establecimientos ante el intento de grandes propietarios por apropiarse de sus terrenos, o bien porque no se les entregaban las tierras prometidas por el Estado, otras veces eran los mismos vecinos quienes disputaban por un terreno.¹⁶ La defensa de los derechos a la ocupación o usufructo de la tierra pública generaba tensiones entre aquellos que intentaban formar un establecimiento productivo, estas disputas se iban cerrando a medida que se definían las condiciones de acceso a los títulos en las zonas que dejaba atrás el avance de la frontera, pero resurgían en los nuevos territorios, donde los ocupantes debían hacer valer sus derechos de asentamiento en un contexto en que las normas legales variaban los requisitos para acceder a la propiedad legal.¹⁷ Asimismo, los hábitos y costumbres que regulaban la actividad rural también se redefinieron a lo largo del siglo, aunque más lentamente que las cambiantes condiciones institucionales y la constante expansión de la producción.¹⁸

Estamos estudiando la cuestión de la ocupación sin títulos de la tierra como un problema persistente en la campaña bonaerense, que se despliega mientras la frontera se corre hacia el interior a lo largo del siglo que transcurre entre 1780 y 1860. El objetivo de este trabajo consiste en mostrar la permanencia de los establecimientos productivos sin títulos a medida que se cierra el acceso a la propiedad legal de la tierra,¹⁹ insistiendo en que ocupación y

225-254.

¹⁶AZCUY AMEGHINO, Eduardo. “¿Oferta ilimitada de tierras?”. Un análisis de caso: Navarro, 1791-1822”, en *Ciclos*, año IV, vol. IV, nº 6, 1er. semestre de 1994, p. 175-216. BANZATO, Guillermo. “Los conflictos por la ocupación de la tierra en la frontera bonaerense. Chascomús, 1779-1822”, en *V Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, I Jornadas Rioplatenses Universitarias de Historia*, Montevideo, 1995, ms. y “De ocupantes a propietarios, los conflictos entre vecinos de la frontera bonaerense. Chascomús y Ranchos, 1800-1840”, en *III Encuentro Argentino-Chileno de Estudios Históricos*, Buenos Aires, 1999, ms.

¹⁷Una revisión de las políticas públicas para la transferencia de tierras a los particulares en el siglo XIX, en VALENCIA, Marta. “As políticas sobre as terras públicas em Buenos Aires durante o século XIX”, en MOTTA, Marcia y MENDONÇA, Sonia Regina (coord.) *Nacao e Poder: As Dimensoes da Historia*, Niteroi, RJ, Universidade Federal Fluminense, 1998, pp. 67-79.

¹⁸Cfr. AMARAL, Samuel. *The Rise of Capitalism on the Pampas. The Estancias of Buenos Aires, 1785-1870*, New York, Cambridge University Press, 1998 y FRADKIN, Raúl. “Entre la ley y la práctica: la costumbre en la campaña bonaerense de la primera mitad del siglo XIX”, en *Anuario IEHS*, nº 12, 1997, pp. 141-156.

¹⁹En esta perspectiva ver GELMAN, Jorge. “Un gigante con pies de barro. Rosas y los pobladores de la campaña”, en GOLDMAN, Noemí. y SALVATORE, Ricardo (comp). *Caudillismos rioplatenses*,

propiedad legal son dos procesos complementarios y conflictivos a la vez.²⁰ Prestaremos especial atención a los partidos²¹ de Chascomús -desde 1780 hasta 1838, como expresión de aquel primer movimiento territorial hacia el sur-, y Bragado, que refleja las tensiones en el oeste de la provincia hacia la década de 1860, en momentos que el ferrocarril extendía sus líneas enlazando la capital con los centros poblados de la frontera.

Propietarios y ocupantes en Chascomús

En la primera mitad del siglo XIX, muchos habitantes de las provincias decidieron trasladarse hacia el litoral para conseguir trabajo, moviéndose solos, con su familia o formando una allí. En un contexto de permanente llegada de emigrantes la tasa de crecimiento poblacional alcanzó un 4% anual entre el padrón de 1815 y el de 1836.²² Estos habitantes no siempre permanecían mucho tiempo en un lugar, sino que tenían una alta movilidad, de manera que una cosa era asentarse en el territorio y otra muy distinta ser “vecino” (en el padrón levantado en Chascomús en 1815 había 384 peones “que por no tener domicilio ni existencia no se denominan”), y mucho más dificultoso aún era conseguir reconocimiento o aceptación de derechos sobre el terreno que se estaba trabajando. El estudio combinado de las fuentes demográficas y catastrales nos ha permitido evaluar el acceso a la posesión legal y la importancia del asentamiento sin títulos de propiedad en la ocupación productiva del territorio.

Cuando investigamos la evolución de la transferencia de tierras públicas a manos privadas en esta región, logramos determinar que el gobierno tardo colonial en muy pocos casos reconoció legalmente la ocupación del territorio en este partido, quedando en manos de los gobiernos pos revolucionarios el primer intento de ordenamiento jurídico que se llevó a cabo entre los años 1818 y 1822, período en que se otorgaron donaciones de tierras y se entregaron títulos de propiedad en moderada composición.²³ De manera tal que, en Chascomús, de los 12 hacendados, 100 estancieros y 105 labradores registrados en el padrón levantado en 1815, sólo un hacendado podía respaldar legalmente su patrimonio. Otros 24 productores poseían derechos consuetudinarios sobre sus tierras, los que serían

Buenos Aires, Eudeba, 1998, p. 223-240.

²⁰BANZATO, G. y QUINTEROS, G. *op. cit.*

²¹El territorio argentino se divide en provincias y éstas en partidos o departamentos, que son la mínima unidad político-administrativa.

²²El padrón de 1815 en Archivo General de la Nación (AGN), X-8-10-4 y el de 1836 en AGN X-25-2-4.

²³BANZATO, Guillermo “Ocupantes y propietarios legales en la región nordeste del río Salado. Chascomús, Ranchos y Monte entre 1779 y 1850”, en GIRBAL-BLACHA, Noemí y VALENCIA, Marta (coord). *Agro, tierra y política. Debates sobre la historia rural de Argentina y Brasil*. La Plata, EUNLP, 1998, pp. 37-64. Para un contexto espacial más amplio ver INFESTA, María Elena. “Aportes para el estudio del poblamiento de la frontera del Salado”, en AAVV, *Estudios sobre la provincia de Buenos Aires*, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, 1989, pp. 61-76.

confirmados por las autoridades en su gran mayoría en el período 1818-1822,²⁴ cabe aclarar que hubo 23 propietarios que no figuraron en el padrón, algunos de ellos por su condición de absentistas. El 90% del conjunto de labradores, estancieros y hacendados de Chascomús no tenían, ni alcanzarían, ningún tipo de reconocimiento de dominio sobre los terrenos que ocupaban, más que el acuerdo de los propietarios para establecerse en sus campos. Las fuentes trabajadas hasta el momento, no permiten precisar la magnitud ni la índole del consentimiento de aquellos a quienes se les reconocía derechos de propiedad para que los ocupantes permanecieran en sus establecimientos. Entre esos propietarios se destacaban los originarios de Buenos Aires y en segundo lugar los de Chascomús. Aunque no es excluyente, el comportamiento de esta variable tiene directa relación con los años de antigüedad en la zona²⁵ y, seguramente, con la disponibilidad de capital.

Luego de 1822, el Estado otorgó tierras en enfiteusis, como estas parcelas al nordeste del río Salado eran casi todos lugares ya habitados hacía mucho tiempo o sobras de terrenos, no se realizó un aporte de tierras nuevas,²⁶ ni posibilitó la ocupación de terrenos baldíos.²⁷ Sin embargo, en los veinte años que separan a los padrones de 1815 y 1836, no sólo aumentaron los ocupantes de la campaña, sino que a partir de la fuerte incidencia de las ventas y en menor medida la partición hereditaria, se subdividieron los terrenos y llegó a la zona una nueva cohorte de propietarios. El padrón de 1836 fue dividido en cuarteles, excluyendo los correspondientes al pueblo y sus alrededores se han analizado aquellos ubicados en el área rural, correlacionando los habitantes que figuran como “dueños” de “casa”, “chacra”, o “estancia”, con nuestras listas de propietarios confeccionadas a partir de los expedientes de solicitud de tierra, mensuras antiguas, duplicados de mensura y sucesiones. Del total de “dueños” censados poco más del 20% podían demostrar su titularidad de los terrenos. Con lo que se demuestra que en Chascomús, la puesta en

²⁴2 hacendados, 17 estancieros y 2 labradores. Deben agregarse, además, dos viudas de militares ex fundadores de la guardia de Chascomús cuyos hijos obtuvieron los títulos correspondientes a los campos en que se habían asentado.

²⁵Esto puede determinarse a partir de las solicitudes de títulos en que el ocupante debe declarar los años de ocupación y confirmarlo a través de tres testigos, con el fin de reclamar el derecho de preferencia en la compra de las tierras si demostraba más de diez años de asentamiento. En este partido cinco eran fundadores de la guardia o sus hijos, otros cuatro habían llegado en los últimos años del siglo XVIII, cuatro más entre 1808 y 1812. No hay datos en dos casos.

²⁶A través de la reconstrucción parcelaria y realización de registros gráficos, se ha demostrado que en esta región fue ocupado todo el territorio hacia 1822. Cfr. BAZZATO, Guillermo. “Análisis y comentario de fuentes para el estudio de la propiedad legal de la tierra en los partidos de Chascomús, Ranchos y Monte. 1780-1850”, en *Trabajos y comunicaciones*, n° 25, 1998, pp. 151-178.

²⁷El caso más común abarcaba a quienes residían antes de 1822 y no reclamaron auxilio legal por ninguno de los otros sistemas. Otra causa por la que los solicitantes quedaron encuadrados en la nueva legislación fue el retraso de los trámites iniciados entre 1819 y 1822, ya sea por litigios u otros motivos. Finalmente, las deficiencias de las mensuras dejaron porciones de campos sin títulos, entre vecinos o hacia los cursos de agua, la ley previó el problema y así, estos territorios ocupados de hecho fueron mensurados y obtenidos en propiedad legal por los linderos con el lado más largo sobre ellos.

producción de la tierra se estaba llevando a cabo, principalmente, por los sectores de medianos y pequeños productores, entre quienes prevalecieron los que no contaban con la propiedad de la tierra.

Esta persistencia de la ocupación sin títulos entre los primeros asentamientos a fines del siglo XVIII y la época de Rosas, se acompañó de continuos intentos por acceder a la propiedad legal, los que, como hemos visto, no siempre fueron exitosos, y aunque esto no impidió la continuación de la ocupación productiva del suelo, generó algunos conflictos. La tensión entre posesión y propiedad se definió al principio mediante reclamos por el incumplimiento de las promesas de reparto de parcelas cuando se fundó el fuerte de Chascomús; de allí se derivaron litigios entre los primeros pobladores y denunciantes de tierras ajenas al pago; más tarde los mismos vecinos litigaron por el derecho a la ocupación, usufructo y propiedad legal de la tierra.

La estrategia de protección del territorio fronterizo que llevó a cabo el virrey Vértiz consistía en un asentamiento productivo alrededor de fuertes y fortines que permitiría acompañar la defensa militar proporcionada por los blandengues con la asistencia de milicianos, quienes en tiempos de paz podrían dedicarse a atender sus establecimientos.²⁸ Pero, según los propios milicianos esta modalidad implicó el reclutamiento forzoso de familias en la campaña inmediata a Buenos Aires, sobre todo de aquellas que no tuvieran los títulos correspondientes a las tierras que ocupaban. Por otro lado, nunca se verificó el reparto de parcelas que prescribían las Leyes de Indias, necesario para asegurar jurídicamente la ocupación.²⁹ Una y otra vez reclamaron los milicianos por sus tierras argumentando que redundaría en beneficio del Estado y los intereses del rey, además de asegurar la defensa de la frontera. Fueron apoyados por algunos comandantes de fronteras y hasta se encontró la orden que se enviara al comandante Escribano, fundador del fuerte de Chascomús para que se otorgara la tierra.

Pero nunca se realizó el consabido reparto y sin un respaldo jurídico adecuado, los pobladores de Chascomús debieron enfrentar las solicitudes de tierras de los grandes propietarios de Buenos Aires, Antonio Rivero de los Santos y Antonio Obligado, a fines de la década de 1780, reafirmando sus derechos legales y su prioridad política ganada, según su visión, a fuerza de soportar las penurias de la vida en la frontera. Sin embargo, Antonio Rivero de los Santos logró establecer “Los Portugueses”, una de las estancias más grandes en la provincia (46.000 hectáreas), que en 1814 compró Juan Bautista Segismundo; mientras Antonio Obligado, que esperaba tomar todo el territorio entre Ranchos y Chascomús, vio reducidas sus pretensiones a la estancia “Averías” de 3.500 hectáreas,

²⁸Memoria del Virrey Vértiz, 12 de marzo de 1784, en *Revista de la Biblioteca Pública de Buenos Aires*, 1880, tomo III, pp. 265-389.

²⁹RECOPILACION DE LEYES DE LOS REINOS DE LAS INDIAS, Madrid, Boix, 1841. Tomo segundo, libro cuarto, título quinto, leyes VII y IX y título doce, leyes I, II, XIV, XV y XVI.

aunque nunca logró los títulos correspondientes.³⁰ En cuanto a los primeros pobladores de la guardia que se encontraban afectados por las solicitudes de Rivero de los Santos y Obligado, muy pocos lograron perpetuar su asentamiento,³¹ en casi todos los casos fundaron sus estancias dibujando un primer cordón alrededor de las lagunas Vitel y Chascomús, en las cercanías del fuerte, aunque todavía quedaba tierra suficiente en sus linderos y en las laguna "Encadenadas" rumbo al Salado.

Mientras se estaban desarrollando estos pleitos, en 1796 el comandante Escribano hizo mensurar 20.250 hectáreas. Luego de su fallecimiento, la viuda solicitó una moderada composición en noviembre de 1808, tras una rápida resolución favorable a fines de enero de 1809 vendió todo a José Domínguez, un abastecedor de la ciudad de Buenos Aires. El nuevo propietario exigió el desalojo de las familias que estaban asentadas en sus campos, con lo que se inició un largo litigio, implicándose en el mismo las autoridades civiles y militares de Chascomús. Sobre todo a partir de 1810, en que Fermín Rodríguez, un antiguo miliciano, fundador de la guardia y "hacendado", se hizo cargo de la comandancia del fuerte, logrando frenar con su intervención la orden de desalojo firmada por el gobernador. Rodríguez resaltó el beneficio público de sostener milicianos que a su vez poblaran la frontera e hizo hincapié en los servicios prestados, en contraste con Domínguez, que nada había hecho allí. Hasta el año 1813 consiguió el comandante eludir las órdenes de desalojo, en ese año el coronel Pedro Andrés García visitó el lugar a fin de informar sobre la situación. Por su escrito sabemos que venía recorriendo la campaña y observando sucesos similares, familias de labradores y ganaderos "arruinadas" por las denuncias de los "monopolistas" que provocaban el despoblamiento de la campaña y minaban las bases estructurales del Estado, esto es: población abundante y productiva primordialmente en el ramo agrícola, por eso,³² argumentaba

"... mientras VE no haga detener el prurito de denuncias de terrenos. Mientras estos no se den regladam^{te} a los labradores y ganaderos en propiedad, bajo las demarcaciones y deslindes q^e los pongan a cubierto de la ambicion de pudientes estableciendo las Poblaciones combenientes, es forzoso q^e la agricultura se aniquile y q^e hasta las especies de ganados, principal Patrimonio de esta Provincia, se extingan..." Las sucesivas intervenciones de los distintos comandantes militares de la guardia y sus superiores en la

³⁰ El hijo de Obligado vendió los derechos a Marcelino Carranza y éste los transfirió a los hermanos Anchorena, quienes regularizaron la tenencia obteniendo una enfiteusis en 1826 y comprando en 1837. Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires - Escribanía Mayor de Gobierno (AHPBA-EMG), 148-11867-1824. Archivo Histórico de Geodesia - Mensuras Antiguas (AHG-MA), libro 1, p. 6; AHPBA-EMG, 142-11488-1837.

³¹ Sólo cuatro familias patricias españolas; dos de las familias de blandengues; dos más obtuvieron sus títulos en reconocimiento a los servicios prestados por sus esposos.

³² Para un estudio más amplio de la vida y escritos de Pedro Andrés García ver GELMAN, Jorge. *Un funcionario en busca del Estado. P. A. García y la cuestión agraria bonaerense, 1810-1822*, Quilmes, Universidad Nacional de Quilmes, 1997.

frontera consiguieron establecer un statu quo hasta 1818, luego José Domínguez consiguió su propósito desalojando de sus campos a un primer grupo de cuatro familias en enero de 1819, y a mediados de agosto, una vez levantada la cosecha, a otras seis. Es importante mencionar que entre 1812 y 1819 pasaron por las tierras de Domínguez unas cuarenta y cinco familias, de las cuales quince estuvieron todo el período, otro conjunto igual sólo aparece el primer año y el otro tercio el último. Muy pocos pudieron reacomodar su situación, es notable que dentro del grupo de mayor permanencia unas siete familias se quedaran con el consentimiento del propietario. Por otro lado, antes del desalojo sólo cuatro familias corrieron su establecimiento logrando mensurar nuevos terrenos y adquiriéndolos en moderada composición entre 1819 y 1821. Finalmente debe destacarse que, salvo una, ninguna de estas familias puede ser considerada entre los primeros pobladores, ya que no se encontraron ni en el relevamiento poblacional de 1788,³³ ni tampoco fueron mencionados en la mensura realizada en 1796, (lo que era obligatorio y por otro lado frecuente, pues hasta se usaban los ranchos de los ocupantes para marcar mejor los mojones). De manera que aquí podemos observar, por un lado, que algunos militares de alta graduación pudieron alcanzar los títulos de propiedad, por otro la tensión entre civiles y militares en la frontera, finalmente la movilidad poblacional, pues entre la mensura y la toma de posesión de Domínguez habían pasado trece años, probablemente el campo había quedado sin demasiada vigilancia, así que se instalaron allí nuevos ocupantes ejerciendo presión no solamente para trabajar sino también para poseer la tierra con respaldo jurídico suficiente. Algunos poseedores de Chascomús no alcanzaron a tramitar sus títulos cuando se detuvo la enajenación de tierras públicas en el año 1822 para luego decidir su entrega en enfiteusis. Para esta época estaba ocupado todo el territorio al norte del río Salado ya fuera en posesión o en propiedad. A partir de 1824, la engorrosa legislación enfiteútica obligó a todos los tenedores de terrenos públicos a solicitarlos en un plazo perentorio de seis meses, luego del cual perderían su derecho de preferencia, amenaza que al repetirse en 1826 demostró ser muy poco efectiva.³⁴

Además, uno de los decretos que reglamentaban la enfiteusis impuso la “suerte de estancia”³⁵ como mínimo necesario para solicitar las tierras, por debajo de ese tamaño se consideraban sobras y, aunque quienes las ocuparan tenían la posibilidad de incluir otros terrenos contiguos para completar la medida, si no lo lograban podían ser reclamadas por el propietario que tuviera mayor extensión adyacente al terreno.³⁶ Esta disposición trajo serios

³³Ver BAZATO, Guillermo y QUINTEROS, Guillermo *op. cit.*

³⁴Decretos del 17 de abril, 1º de julio de 1822 y 28 de setiembre de 1824. REGISTRO OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, Buenos Aires, Imprenta del Mercurio, 1874, año 1822, pp. 83 y 117 y año 1824, p. 79. Decreto del 15 de abril de 1826. PROVINCIAS UNIDAS DEL RÍO DE LA PLATA. Registro Nacional, año 1826, Buenos Aires, imprenta del Mercurio, 1874, p. 61-62.

³⁵Tres cuartos de legua cuadrada, igual a 2.025 hectáreas.

³⁶Decreto del 27 de setiembre de 1824, art. 4º y 5º. REGISTRO OFICIAL DE LA PROVINCIA DE

problemas para aquellos medianos o pequeños poseedores que no habían tramitado los títulos por los sistemas anteriores, puesto que si no alcanzaban la unidad mínima sus terrenos podían ser disputados por los vecinos. Entre la aplicación de los distintos sistemas de acceso a la propiedad, aunque las solicitudes y entregas de tierras se aceleraron entre 1818 y 1822, fueron quedando algunos que por distintos motivos no realizaron los trámites, y con las nuevas reglamentaciones cuando los empezaron tuvieron que lidiar con las pretensiones de sus vecinos propietarios, como lo demuestran los ejemplos que siguen.

En 1824 Luis Gallo solicitó la parcela que cultivaba sobre el río Samborombón. Emplazada entre la gran estancia de “Las Mulas” y otras de menor magnitud era una angosta franja de exactamente 2.001 has. Como por esa escasa porción de 24 hectáreas no llegaba a la “suerte de estancia”, se le indicó al juez que informara si había otros terrenos para completar el mínimo, y como hemos dicho que estaba rodeada de otros predios, era imposible. En noviembre de 1824, su vecino Eugenio Villanueva, el dueño de “Las Mulas”, inició los trámites para obtenerlo en enfiteusis, ya que tenía el costado lindero más extenso sobre el terreno en cuestión. Desde su primer pedido Gallo se atuvo al argumento de la antigua posesión, lo repitió constantemente y sobre todo cuando se dio cuenta que la aplicación fría de la norma legal le arrebatada sus tierras

“Así es pues que nosotros con Animales de toda especie en nuestro campo, con Arboledas, con sembrados todos los años, con nuestros Ranchos, y familia hemos vivido sin perjudicar a los colindantes de 20 a 30 años, ... ninguno jamas antes de los reglamentos o decretos desde fines de 1824, ha intentado despojarnos ni disputarnos mejor derecho. Y sobre todo ¿a que corazon, de marmol no le parecerá cruel, y riguroso desterrar, y desalojar sin saber donde á unos Padres ancianos con Hijos mayores y menores, con ranchos, sementeras, zanjás, Arboledas y quadrupedos Lanares, Caballares y Bacunos ... por que le falten mil o dos mil baras quadradas....?”³⁷

Josefa Aguilar ocupaba un terreno sobre las lagunas “Encadenadas” desde fines del siglo XVIII, pero tampoco accedió a la propiedad legal con los sistemas anteriores a 1822 y su caso quedó encuadrado en la enfiteusis. Su situación era peor que la de Gallo pues su terreno apenas alcanzaba las 800 has., muy lejos de las 2.025 requeridas. El predio tenía tres lados apetecibles, uno de ellos limitaba con el de Juan Nepomuceno Fernández un propietario de larga data en Chascomús, pues su padre había sido uno de los primeros en establecer estancia, su madre consiguió los títulos por donación del directorio y en año 1824 se la vendió; otro lado daba con el de Tadeo Almada quien había llegado en 1806 y el

BUENOS AIRES, año 1824, p. 78-79.

³⁷AHPBA-EMG, 21-717, 145-11707.

tercero con las tierras de Pablo Santisteban que se encontraba allí desde 1812. Almada y Santisteban también escrituraron mediante una donación, a la vez, tanto Fernández como Almada eran personas de reconocida solvencia -tenían otras estancias al sur del río Salado- y con muy buenas vinculaciones, el primero por la trayectoria militar de su familia, incluidos sus propios servicios; el segundo era suegro de Prudencio Rosas.³⁸ Doña Josefa tenía como únicos antecedentes su establecimiento temprano hacia el último lustro del siglo XVIII, dos veces viuda y con veinte hijos, cinco de ellos en el servicio militar. Todos pidieron el predio, aunque sus vecinos reconocían que Josefa Aguilar se había instalado desde hacía mucho tiempo y ninguno podía disputarle su mayor antigüedad, pues los testigos presentados por todas las partes en conflicto aseveraron los treinta años de asentamiento, de todas maneras trataron de aferrarse a las disposiciones enfiteúticas acerca de la medida mínima para solicitar los campos.³⁹

En estos casos de terrenos declarados sobrantes, las autoridades no sentaron jurisprudencia en sus fallos. Sobre los mismos argumentos hubo fiscales que aplicaron la ley tal como estaba escrita y otros que tuvieron en cuenta las circunstancias que rodeaban al caso. No hubo posibilidades para Luis Gallo, en 1826 el fiscal Acosta indicó que habiendo dos denuncias debía primero resolverse el derecho de preferencia, sin mención alguna de los derechos de las partes. Aquí concluye el expediente iniciado por Gallo, aunque a partir de la solicitud de Villanueva podemos suponer que desistió de su oposición porque cuando se mensuró en diciembre y se dio la posesión, Gallo estaba presente junto a otro ocupante, ambos aceptaron desalojar cuando se los solicitó el nuevo propietario. Esta parcela, que se había fusionado a la estancia de “Las Mulas”, luego fue comprada al Estado por Villanueva. Tal vez el caso en que todos los argumentos se confrontan es el de Josefa Aguilar, quien tuvo no sólo el apoyo del fiscal Pico, sino también de la Comisión Topográfica.⁴⁰ Según aconsejaron los expertos de esta última, si se atenían a la forma en que estaban mensurados todos los campos y al espíritu de lo reglado últimamente,⁴¹ Juan N. Fernández no podía alegar derechos porque las lagunas dividían los dos campos y ninguno de los predios similares cruzaban de un lado a otro de la divisoria de aguas; en cambio si tomaban en cuenta el mínimo indispensable que marcaba la ley y el campo no alcanzaba a las 2.025 has., debía dirimirse entre los linderos de mayor extensión Fernández y Ford-Baudrix;⁴² por último, si el terreno alcanzaba la medida se haría valer la antigüedad de asentamiento de la

³⁸ Hermano de Juan Manuel de Rosas, por entonces uno de los más importantes hacendados de la provincia y gobernador en los períodos 1829-1832, 1835-1852.

³⁹ AHPBA-EMG, 142- 11497; 144-11642, 142-11482, 148-11879.

⁴⁰ Esta Comisión fue creada por decreto del 9 de abril de 1824, con el fin de ordenar el deslinde de la propiedad territorial de la provincia. MUZLERA, Joaquín, *Recopilación de leyes, decretos y resoluciones de la provincia de Buenos Aires*, La Plata, Isidro Sola Sanz, 1895, v. 1, pp. 29-30.

⁴¹ Decreto del 6 de julio de 1826, art. 1. Registro Nacional, año 1826, p. 118.

⁴² Estos habían comprado la estancia de Tadeo Almada y en la escritura se incluyó el derecho a la solicitud de enfiteusis.

ocupante. Luego de la mensura las cosas estuvieron más claras, los expertos coincidieron en que no alcanzaba, pero que igualmente podía tenerse en cuenta que en otros casos se había otorgado igual la enfiteusis, que el terreno lindaba con aguadas permanentes y que la ocupante hacía muchos años que estaba allí. A estas consideraciones el fiscal agregó los principios de no otorgar grandes extensiones “para alexar los subarriendos o feudatarios” y de dar preferencia al poseedor. Pico argumentó que todos los linderos tenían suficiente terreno y aunque la razón principal que alegaron fue que el de su vecina no alcanzaba la suerte de estancia, la señora en cuestión tenía una antigüedad de treinta años, habían muerto allí sus dos esposos, sus hijos estaban sirviendo en la milicia y aún ella permanecía en el campo con sus ganados, por lo que se preguntaba

¿y había razón para arruinar a una viuda infeliz que ha dado tantos brazos a la Patria por solo la mezquina idea de que falta a su posesión una pequeña parte para complementar suerte de estancia? ¿No es atendible su posesión de 29 años y triste el recuerdo de desalojarla con sus hijos del lugar de su nacimiento a buscar otro asilo? Ultimamente ¿No es injusto el exponerla a que pierda sus ganados sacandolos de su antiquada querencia y que por no sufrir tal quebranto tenga que malvaratarlos a los vecinos colindantes a que sin duda tendran aspiraciones? Lo es Señor Exelentísimo

Por lo tanto, aconsejó que se diera el terreno a Josefa Aguilar. Ford y Baudrix contestaron esta exposición solicitando que se atuviera al texto expreso de la ley, esto es, medidas mínimas y mejor derecho para los linderos que lo solicitaran. El fiscal volvió sobre sus argumentos referentes al servicio que los hijos de Josefa Aguilar hacían al Estado, la antigua posesión y ahora un argumento que no había aparecido en ninguno de los litigios anteriores, su condición de nacidos en el país acosados por dos extranjeros: “¿Y quienes S. E. pretenden que V.E. reboque su providencia, y destruya una familia venemerita natural del pais? Precisamente dos individuos que no son naturales de el y precisamente los que no tienen el mejor derecho”, porque no tenían el lado más extenso sobre el terreno solicitado, y agregó que el conjunto de los argumentos planteados significaban una interpretación de la ley y una forma de buscar equidad para no beneficiar a los “ambiciosos” que tenían terrenos de sobra, perjudicando a una “honrada familia”. En el año 1834, doña Josefa, que se había casado por tercera vez, recibió el predio en enfiteusis y lo compró al Estado en 1837.⁴³

Dos conflictos por las tierras de Bragado

A inicios de la década de 1850 en el modesto caserío que formaba el incipiente núcleo urbano de Bragado se suscitó un litigio por las tierras de Mariano Biaus. En 1839, éste

escribió un terreno de 34.000 has. que había obtenido por transferencia de derechos de enfiteusis. Ese año fue uno de los más convulsionados del segundo gobierno de Rosas, porque al bloqueo del puerto de Buenos Aires por la escuadra francesa, se sumó la rebelión de los hacendados del sur de la provincia y la invasión del ejército de Juan Lavalle.⁴⁴ Como Biaus se unió a los sublevados sus bienes fueron embargados por el gobernador y debió exiliarse pues en esos años comenzaron las persecuciones a los enemigos políticos de Rosas.⁴⁵ Al regresar en 1850, Biaus encontró las tierras ocupadas con haciendas del Estado para provisión del ejército, ya que se había instalado en ellas el cantón de Bragado en el que se donaron solares para formar el pueblo, levantándose entre 150 y 200 casas. Cuando recobró el dominio se encontró con esta situación de hecho y pretendió cobrar arrendamiento a los ocupantes de las tierras, quienes se negaron a pagar originando un largo pleito. Por un lado, los pobladores argumentaron que eran

“... en su mayor parte antiguos artesanos que después de una larga serie de años en continuo servicio militar lidiando siempre contra los indios enemigos en toda la extensión de la línea de fronteras, hoy descansan de sus largas fatigas en el seno de sus numerosas familias... y no tienen otro abrigo para ellos y sus hijos...”;⁴⁶

el juez de paz abonó la presentación de los vecinos con una pormenorizada descripción de lo edificado, aclarando, contra los argumentos de Biaus, que no sólo pertenecían a los miembros del regimiento acantonado

“...pues que todas las fincas de material cocido y crudo pertenecen a ciudadanos particulares nacionales y extranjeros, negociantes los mas y avecindados los otros, y la prueba de esta verdad es que cuando ha faltado de este punto la fuerza militar, este pueblo se ha sostenido con su propio vecindario afrontando a las incursiones de indios a que siempre ha estado expuesto como pueblo fronterizo”.⁴⁷

También el informe del Departamento Topográfico⁴⁸ apoyaba el planteo de los pobladores,

⁴³ AHG, Duplicados de Mensura, partido de Chascomús, número 198.

⁴⁴ BARBA, Enrique Mariano. “Las reacciones contra Rosas”, en LEVENE, Ricardo (dir.) *Historia de la Nación Argentina*, Buenos Aires, El Ateneo, 1962, 3ra. edición, v. 7, segunda sección, cap. 9, pp. 331-445.

⁴⁵ Sobre la presión económica del rosismo a sus adversarios ver HERAS, Carlos. “Confiscaciones y embargos durante el gobierno de Rosas”, en *Humanidades*, 1929, tomo XX, pp. 585-607 y BAZZATO, Guillermo, “Las confiscaciones y embargos de Rosas en Chascomús. 1840-1852”, en *XVI Jornadas de Historia Económica*, Quilmes, 1998, ms.

⁴⁶ MOYA, Juan R. *Contribución a la Historia de Bragado*, La Plata, Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, 1957. Este autor utilizó el expediente AHPBA-EMG 25-1065, para develar la fecha de fundación del partido de Bragado y, aunque relata y transcribe el conflicto no se detiene en una interpretación del mismo.

⁴⁷ AHPBA-EMG, 25-1065.

⁴⁸ Creado en 1826 sobre la base de la Comisión Topográfica antes mencionada. ESTEBAN, Francisco. *El Departamento Topográfico de la Provincia de Buenos Aires*, La Plata, edición del autor,

alegando que “sería contrario a los principios que nos rigen que pudiese un particular ser el propietario de un pueblo e imponer por esto un arrendamiento a los habitantes como si fuera un barón o un conde” y alude al decreto del 3 de febrero de 1827, que en su artículo segundo exceptuaba de la enfiteusis a los terrenos destinados a la formación de ejidos en la zona de frontera.⁴⁹ Estos argumentos obligaron a Biaus a moderar sus exigencias diciendo que en realidad no aspiraba a que le pagaran arrendamiento por el asentamiento castrense, dados los beneficios en seguridad que traían a la zona, pero al mismo tiempo no podía consentir “... que a la sombra de la ocupación han pretendido algunos ... formar un establecimiento de cría de chanchos”.⁵⁰

Seguidamente, se mandó levantar un informe de las quintas y chacras determinándose que había seis pobladas; una sola con autorización del gobierno, dos con permiso verbal del dueño del campo, tres por cuenta y riesgo de los interesados. En ese sentido el informe del asesor del gobierno, Dalmacio Vélez Sarsfield,⁵¹ concluyó que los comandantes militares estaban autorizados para entregar en propiedad los solares en los pueblos de campaña pero no así las quintas y chacras y propuso como solución que Biaus cediera 1.350 hectáreas para trazar el ejido de la localidad y se repartieran los solares a los pobladores que ya habían edificado sus casas, lo que zanjó la cuestión.

A fines de la década de 1860 Bragado alcanzó los 4.000 habitantes, la distribución productiva de la superficie dividía al partido en 24 estancias, algunas de ellas de grandes dimensiones, y 370 chacras dedicadas a la agricultura. Se esperaba por esos años que la llegada del Ferrocarril Oeste, cuyo trazado había sido aprobado, valorizara las tierras y posibilitara aumentar la producción agrícola,⁵² expectativa que generó inquietud entre los ganaderos y agricultores, pues la mayoría de ellos eran ocupantes que no contaban aún con los títulos de los terrenos y solamente 37 arrendaban al Estado.⁵³ En este contexto asistimos a una disputa entre labradores, respaldados por la Municipalidad de Bragado, y ganaderos. El primer grupo estaba compuesto por aspirantes a la compra de las tierras del Estado, algunos eran arrendatarios de pequeñas parcelas y otros simples ocupantes sin respaldo legal. Los ganaderos arrendaban al Estado parcelas de mayor tamaño. Cuando empezó a discutirse la ley de venta de terrenos arrendados al Estado todos sostuvieron su condición de ocupantes como argumento para lograr que se les reconocieran derechos de

1962.

⁴⁹ Muzlera, Joaquín, *op.cit.* v. 1, p. 71.

⁵⁰ AHPBA-EMG, 25-1065.

⁵¹ Vélez Sársfield fue uno de los más importantes jurisconsultos argentinos, autor de los códigos civil y de comercio. En la actividad política fue miembro de la legislatura provincial, y varias veces ministro del poder ejecutivo. UDAONDO, Enrique. *Diccionario biográfico argentino*, Buenos Aires, Coni, 1938, pp. 1095-1907.

⁵² MULHALL, M.T. y E.G. *The Handbook of the River Plate Republic*, Londres y Buenos Aires, 1869.

⁵³ VALENCIA, Marta. “Los derechos adquiridos y las nuevas ocupaciones en la frontera bonaerense: el sistema de arriendo público, 1857-1876”, en AMARAL, Samuel y VALENCIA, Marta (comp.)

preferencia para la compra. Una cuestión a resolver consistía en quiénes debían ser beneficiados por las leyes, y según cómo se solucionara ésta se definiría un modelo de subdivisión en parcelas de tamaños reducidos, con el fin de promover la agricultura, o uno de tenencias más grandes que mantuviera el predominio de la ganadería.

La discusión que involucraba a estos actores se inició a mediados de 1866, durante la consideración, en la legislatura provincial, de la ley de ventas de tierras públicas arrendadas al interior de la frontera. Allí se separó el caso de Bragado con el fin de estudiarlo especialmente debido a que la Municipalidad había presentado una solicitud en la Cámara de Senadores para que se parcelara en la misma forma que el vecino partido de Chivilcoy, como medida tendiente a incentivar la actividad agrícola.⁵⁴ Los senadores Miguel Esteves Seguí, Ambrosio Lezica y Joaquín Cazón tomaron esta idea y presentaron un proyecto que fraccionaba la tierra pública de Bragado para venderla en parcelas de poco más de 300 has., dando prioridad a los últimos ocupantes para comprar un lote, sin posibilidad de sumar uno adyacente ni transferirlo, a menos que estuviese ya poblado y con cultivo; en cuanto a los arrendatarios de terrenos superiores a 2.700 has. podrían permanecer durante tres años luego de la sanción de la ley usándolo en pastoreo, siempre y cuando no estuviera ocupado por subarrendatarios. De los tres senadores firmantes, Lezica y Cazón tenían tierras en los partidos vecinos, no así el principal defensor del mismo, Esteves Seguí, jurista, político e intelectual de vasta participación en el medio porteño.⁵⁵ El senador Emilio Agrelo, un arrendatario de 16.000 has de tierras públicas en el contiguo partido de Nueve de Julio, se opuso al proyecto considerando que la agricultura no se promocionaba mediante la legislación, sino a partir de condiciones económicas favorables, tales como transporte barato, crédito y mano de obra abundante, que hasta el momento no habían llegado a Bragado.

Mientras en el Senado se discutía este tema entró por la Cámara de Diputados una solicitud de los ganaderos de Bragado para que no se avanzara en su tratamiento por la Legislatura porque contravenía los términos de los contratos de arrendamiento al reducir las extensiones. Otros argumentos apuntaban a que el partido carecía de población, ya había suficiente tierra destinada a la agricultura en las quintas y chacras ubicadas en los ejidos de los pueblos de campaña, y por último que las tierras de Bragado no eran aptas para la agricultura debido a sus médanos, cañadas y bañados. Entre los que firmaron la nota estaban quienes tenían tierras del Estado en arrendamiento, como Saturnino Unzué, uno de

Argentina: el país nuevo, la Plata, EUNLP, 2000, pp. 116-156.

⁵⁴El 14 de octubre de 1857 se dictó una ley especial para el partido de Chivilcoy que autorizó el fraccionamiento y venta de las tierras públicas. Se prohibía adquirir más de un lote por familia, los ocupantes tenían derecho a conservar la posesión ajustándose a los límites o subdivisiones de los lotes. A partir de la subdivisión de las tierras Chivilcoy inició una difícil trayectoria agrícola. MUZLERA, Joaquín. *op.cit.* v. 1, pp. 179-181.

⁵⁵UDAONDO, *op.cit.* p. 382.

los mayores terratenientes de la provincia de Buenos Aires, cuyas estancias se extendían por los partidos de Rojas, Nueve de Julio y Veinticinco de Mayo; otros hacendados como los hermanos Lanús y Martín Berraondo con establecimientos en Bragado, Saladillo y Veinticinco de Mayo, todos partidos linderos.

Más tarde, se publicó una nota de los “vecinos labradores” de Bragado en *El Nacional*, uno de los diarios de mayor circulación y predicamento en la ciudad de Buenos Aires, favorable al proyecto, entre cuyos firmantes se encontraban los arrendatarios del Estado con pequeñas parcelas y los meros ocupantes que hemos mencionado más arriba. Estos argumentaron que la solicitud presentada en la Cámara de Diputados estaba firmada sólo por cuatro peticionantes que podían exhibir su condición de antiguos pobladores, los restantes

“... en su mayor parte no son vecinos de este partido ni se les conoce intereses rurales, habiendo entre ellos varios peones de algunos establecimientos, de lo que se arroja que muy pocos son de los firmantes los que tienen eso que ellos llaman derecho de posesión”.⁵⁶ Consideraban a sus adversarios como

“... señores feudales del territorio de la patria, sin más derecho que el que les da su posición y capitales, de lo que resulta que mientras diez o doce individuos se hacen dueños de la tierra de la que comprende este partido, despojan a aquellos que por mas de veinte años han sostenido con toda clase de sacrificio este campo”.⁵⁷

además consideraban que la calidad de las tierras era óptima para la agricultura, lo que se demostraba por el simple hecho de que se sembraban esos campos desde la fundación del pueblo, agregando que

“los que desgraciadamente no poseemos una fortuna, no tenemos ni aún el derecho de aspirar a un pedazo de tierra que poder llamar nuestra, puesto que toda la absorben los hombres de capital. Por eso nuestros hombres de la campaña no tienen domicilio fijo, ni tienen idea de la propiedad, porque están siempre bajo la tutela de los señores poseedores, a quienes reconocen más autoridad que a los mismos gobiernos”.⁵⁸

La sanción del proyecto fue suspendida en la Cámara de Senadores, Esteves Seguí hizo un nuevo intento al año siguiente, fracasando una vez más ante los ataques de Agrelo. Finalmente se aprobó el proyecto de este último, favorable a los intereses de los ganaderos, pues no se consideraban aparte las tierras de Bragado de manera que los arrendatarios y subarrendatarios del partido quedaron comprendidos en las disposiciones de la ley de venta

⁵⁶El Nacional, 4 de febrero de 1867, año 16, p. 2, col. 1.

⁵⁷Ibíd.

⁵⁸Ibíd.

de tierras públicas de 1867, en iguales condiciones que los de los demás partidos, con la particularidad que quienes no se presentaran a comprar en un plazo de noventa días, perderían sus derechos y las tierras se dividirían en suertes de chacras, declarándoselas de pan llevar,⁵⁹ única concesión a la petición inicial de la Municipalidad.

Resta agregar que cuando el proyecto de Agrelo pasó a la Cámara de Diputados fue defendido por Eduardo Olivera, quien, en consonancia con la nota de los ganaderos ya mencionada, retomó la cuestión de que el incentivo a la agricultura no podía hacerse mediante leyes sino por la coincidencia de acumulación de capital, población abundante y mercados favorables. Propició la unión de la agricultura con el pastoreo diferenciando en zonas la provincia: los partidos cercanos a la ciudad de Buenos Aires, más subdivididos, serían agrícolas y “los fuertes capitales que están destinados al pastoreo” seguirían en los partidos de frontera. Además, estimó que la experiencia de Chivilcoy no había resultado exitosa, debido a que la escasez de capital llevó a los agricultores a endeudarse con los usureros y a perder sus tierras. Rufino Varela enfrentó estos argumentos atacando la falta de coherencia de Olivera acusándolo de ser un antiguo defensor del desarrollo agrícola puesto en esta circunstancia en alid de la ganadería extensiva. Varela sostuvo también que el ferrocarril cambiaría las condiciones de producción y valorizaría las tierras; finalmente desestimó la supuesta falta de un mercado dado que en el país se importaban harinas chilenas. El proyecto de Agrelo, defendido por Olivera, fue aprobado por 27 votos contra 3, resultado publicado en los Anales de la Sociedad Rural Argentina, lo que sugiere un apoyo de la institución, al menos tácito, a la iniciativa de sus miembros más activos. La comisión de hacienda de la Cámara de Diputados estaba formada por Olivera, Mariano Atucha y Melchor Rom, los tres miembros de la Sociedad Rural Argentina,⁶⁰ que en dicha Cámara contaba con quince representantes. Aunque Rufino Varela también pertenecía a esta corporación, quedó demostrado que su posición era francamente minoritaria.⁶¹

Así, la actividad agrícola en Bragado quedó librada a la voluntad de compra de los arrendatarios públicos, beneficiados con los mayores plazos logrados a partir de la sanción

⁵⁹ Se denominaba tierras de pan llevar a las dedicadas a la agricultura.

⁶⁰ La Sociedad Rural Argentina, corporación aún existente, se fundó en 1866 por iniciativa de un grupo de hacendados de la provincia de Buenos Aires liderado por Eduardo Olivera. Surgió en el contexto de una crisis económica coyuntural que afectó a los ganaderos de Buenos Aires, especialmente a los criadores de ovinos que ante la gravedad de la situación decidieron agruparse. Varios de los integrantes de esta naciente corporación integraron a la vez las Cámaras de Diputados y Senadores en la legislatura de la provincia de Buenos Aires y participaron activamente en los debates de leyes que afectaban sus intereses: tierras públicas, fronteras e impuestos. Entre 1866 y 1871 treinta y dos miembros de la Sociedad eran diputados y dieciséis senadores. Cfr. VALENCIA, Marta. “La vanguardia de la Sociedad Rural y su actuación parlamentaria”, en BONAUDO, Marta y PUCCIARELLI, Alfredo. *La problemática agraria. Nuevas aproximaciones*, Buenos Aires, CEAL, 1993, v .1, pp. 121-139. HORA, Roy. *The landowners of the argentine pampas*, Oxford, Oxford University Press, 2001.

⁶¹ Esta información se obtuvo de las bases de datos construidas a partir de los Protocolos de Escribanía General de Gobierno, n° 21 a 53, combinados con las listas de membrecía aparecidas en

de la ley. Esto significó un triunfo de los grandes arrendatarios, al defender sus intereses como legisladores, apoyados por la mayoría de los miembros de la Sociedad Rural Argentina que también actuaban en el ámbito legislativo provincial. En tanto quienes esgrimieron su calidad de antiguos ocupantes "... alentados por las privaciones y los peligros, con la esperanza de hacer suya algún día esa tierra regada con su sangre muchas veces, ocupada por su esfuerzo y conservada con riesgo de sus vidas, de sus familias y de sus intereses ...", perdieron en las Cámaras frente "... a los señores ... sin mas derecho que les da su posición y capitales ..."⁶²

Conclusiones

En este trabajo hemos revisado la cuestión de la ocupación sin títulos de la tierra en la campaña bonaerense. La perspectiva de la historia local ha posibilitado demostrar que, aunque se fue cerrando el acceso a la propiedad legal de la tierra en las zonas cercanas al puerto de Buenos Aires, permaneció la actividad productiva en establecimientos con respaldo jurídico precario. Por otro lado, se ha verificado que desde fines del siglo XVIII, a medida que algunos ocupantes fueron accediendo a la propiedad legal, la llegada de nuevos migrantes o de propietarios de la ciudad puso en discusión la posibilidad de asegurar jurídicamente las posesiones; y aún en la segunda parte del siglo XIX, cuando el aparato legal se tornó más abundante y complejo, en los nuevos partidos de la frontera todavía se encontraban ocupantes sin títulos.

Entre fines del siglo XVIII e inicios del XIX, debido al incumplimiento de las Leyes de Indias por parte del poder central, los fundadores de la guardia de Chascomús vieron coartadas sus posibilidades de acceder a los títulos de propiedad, quedando en una situación jurídica más que precaria y debieron defender su posición contra los intereses de, entre otros, los abastecedores de la ciudad de Buenos Aires. Más tarde, el carácter de vecino antiguo del pago en conjunción con el establecimiento primitivo en el territorio, reconocido por las leyes de Indias y las posteriores del período independiente como condición indispensable para poseer el terreno, ser preferido en el traspaso de dominio y convertirse en propietario, fue puesto en duda por la presión de los nuevos poseedores de terrenos, sobre todo en el período de la enfiteusis.

El proceso de ordenamiento legal iniciado en 1852, coincidente con la organización nacional, la construcción del Estado y la consecuente sanción de los códigos rural y civil, inició una nueva etapa de transferencia a manos privadas de las tierras públicas y en el curso de este proceso una vez más se produjeron enfrentamientos entre los ocupantes sin títulos y quienes podían acceder a la propiedad plena por la vía legal. Por ejemplo, los

los Anales de la Sociedad Rural Argentina .

⁶²El Nacional 4 de febrero de 1867.

ocupantes sin título del partido de Bragado se enfrentaron con el propietario Mariano Biaus quedando al descubierto diversas formas de acceso a la tierra; una vez más se percibe la colisión entre las decisiones de los comandantes de fronteras, los intereses de los pobladores y la legislación en vigencia. El segundo conflicto de Bragado, que llevó más de tres años de discusión legislativa y puede rastrearse en la prensa de la época, tiene la significación de reflejar que todavía a fines de la década de 1860 los ocupantes sin títulos pedían ser escuchados para obtener la propiedad legal de las tierras en las que se habían asentado desde varias décadas atrás. En esta disputa se enfrentaron los pequeños labradores con los ganaderos, ambos sostuvieron su condición de ocupantes como argumento para que se les reconocieran derechos de preferencia en la legislación a dictarse. El final de este episodio fue favorable a los intereses ganaderos que fueron respaldados en las Cámaras Legislativas por diputados y senadores que pertenecían a la Sociedad Rural Argentina. Las cuestiones aquí analizadas permiten mostrar que en la campaña bonaerense las condiciones de producción y propiedad eran más ricas y matizadas que las reflejadas tradicionalmente por la historiografía -un paisaje rural en el que sólo interactuaban los grandes terratenientes y los gauchos- y, a la vez, que durante el siglo XIX con la ampliación del territorio, los conflictos resueltos al interior de la frontera renacieron en las tierras nuevas.